



JUZGADO CINCUENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTÁ  
CARRERA 10 N° 14-33 PISO 12 EDIFICIO H.M.M. TEL: 3418342  
CMPL56BT@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil diecisiete (2017)

RADICACIÓN	:No.110014003056-2017-00734-00
PROCESO	:TUTELA de PRIMERA INSTANCIA
ACCIONANTE	ANA GRACIELA TORRES MORENO
ACCIONADOS	BBVA SEGUROS y el BANCO BBVA
VINCULADOS	ASOCIACIÓN MUTUAL PROGRESO "MUTUOPROGRESO", SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA, COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S. y COVINOC S.A.

Surtido el trámite de instancia, procede el Juzgado a proferir la sentencia que en derecho corresponde, previos los siguientes:

**I. ANTECEDENTES:**

1. DETERMINACIÓN DEL DERECHO VULNERADO: En el escrito se solicita que se amparen los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, vida digna, vida e interés superior del niño.

2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS: Relató el actor que el 25 de octubre de 2013 el Banco BBVA le desembolsó un crédito hipotecario No.00130137009600167680 por valor de \$142.000.000.00, al cual se le incorporó un Seguro de Vida Deudores acorde a la póliza No.0110043 con prima anual de \$819.723.00 y mensual de \$68310.00 donde consta el "anexo al desempleo". Señaló igualmente, que el 31 de julio de 2014 se le desembolsó por dicha entidad bancaria el crédito No.00130137009600175642 por valor de \$188.500.000.00 asegurado bajo la misma póliza con valor anual de \$1.272.658.00 y mensual de \$106.222.00.

Refirió que conforme a la Resolución No.2017140000515 de la Superintendencia de Economía Solidaria se le notificó la decisión de ser separada del cargo que venía desempeñando en la Asociación Mutual Progreso como Representante Legal, situación que informó al Banco BBVA, solicitando reclamando el seguro de desempleo, a lo que no se accedió por no tener derecho a aquel al haber sido abolido hace año y medio, y la imposibilidad de reestructurar los créditos por no contar con un ingreso que respaldara los pagos.



Indicó que en marzo de 2017 acudió a la línea de atención de BBVA SEGUROS, solicitando asesoría y copia de la póliza respectiva, señalándosele la documentación requerida, por lo que solicitó al empleador los documentos exigidos por la Aseguradora, sin atenderse la solicitud ni lograr el suministro de la reproducción de la evocada póliza; reiterando a los accionados la reclamación del seguro, sin que a la fecha haya atendido su requerimiento.

**3.- PRETENSIONES:** La accionante solicita que se ordene a BBVA SEGUROS hacer efectivo el seguro de desempleo acorde a la póliza de seguro No.0110043, que el BANCO BBVA proceda a realizar el abono a capital e intereses de las deudas adquiridas desde febrero de 2017 condonando intereses de mora, corrija en las centrales de riesgo cualquier reporte negativo, cese el cobro que se le viene realizando por las casas de cobranza, suministrándosele la información del abono y el salod de la obligación.

**4. TRÁMITE PROCESAL:** Repartido el expediente al Despacho, mediante proveído del 10 de agosto de 2017, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar a las accionadas para que manifestaran lo pertinente.

**RESPUESTA DE LA ACCIONADA:**

a) **BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.** manifestó que desconocía la petición de la accionante, remitiéndose solamente un correo electrónico, que se atendió por ese medio. Preciso que no procede lo pretendido por la promotora del amparo respecto a dicha Aseguradora, ya que al momento del siniestro la póliza no contaba con el amparo de desempleo e Incapacidad Total y Temporal, conforme las exigencias del Banco BBVA al contratar el seguro colectivo de Vida Grupo Deudores a ellos adjudicado, por lo que se objeta la reclamación, sin poderse amparar el riesgo más allá de los amparos contratados con la entidad bancaria. Añadió que el amparo de tutela resulta improcedente ya que la accionante cuenta con los mecanismos ordinarios o de protección al consumidor financiero para hacer valer su derecho, como tampoco para dirimir controversias de índole económico, por lo que solicita rechazar la acción constitucional por inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales de la señora Ana Graciela Torres Perdomo por esta aseguradora.

b) La **COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S.** señaló que fue contratada por el Banco BBVA como un agente externo de cobro, quien en cumplimiento de esa gestión se comunicó con la actora, quien manifestó que estaba tramitando el seguro de desempleo en la oficina Colseguros, informándose por esa entidad que la cliente dejó comunicación, sin pronunciamiento adicional, por lo que conforme a su actuación, se cumplieron los procedimientos establecidos sin que por la gestión de cobro se hayan vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.

c) La **SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA-SUPERSOLIDARIA-** precisó que se abstiene de hacer pronunciamiento de



fondo respeto de los hechos de la tutela, por no ser del resorte de esa entidad, ya que se trata de derechos fundamentales presuntamente vulnerados por BBVA SEGUROS y el Banco BBVA al no reconocérsele el seguro de desempleo al que se hizo acreedora al momento de adquirir sus créditos, lo que se escapa del control de dicho Órgano Estatal de Supervisión, no siendo sujeto pasivo dentro de la acción constitucional. Refirió que la Asociación Mutual Progreso MUTUO PROGRESO fue objeto de toma de posesión para administrar sus bienes, haberes y negocios por parte de esa Superintendencia a través de la resolución 2017140000515 del 15 de febrero de 2017, solicitando separar a las personas que ejercían los cargos de representante legal y suplente, revisor fiscal principal y suplente, y miembros del consejo de administración y la junta de vigilancia, designándose al agente interventor LUIS FERNANDO ALVARADO ORTIZ como su actual representante legal, por lo que solicita ser desvinculada al existir falta de legitimidad en la causa por pasiva.

- d) **COVINOC S.A.** aseguró que ha mantenido relaciones comerciales con BBVA con el ánimo de efectuar cobro pre-jurídico y eventualmente jurídico de la cartera de esa entidad, por los créditos en mora, por lo que se encarga única y exclusivamente de la gestión de cartera que remitida por el BBVA; añadió que a la fecha no tiene asignadas para cobro obligaciones a cargo de la señora Ana Graciela Torres Moreno, por lo que BBVA es la entidad competente para atender la pretensión de la actora quien posee la información del crédito y los seguros adquiridos, además que en la actualidad no realiza gestiones de cobro de la accionante, por lo que solicita desestimar la acción de tutela en contra de Covinoc S.A., por no existir vulneración de derecho fundamental alguno.
- e) El **BANCO BBVA** no se pronunció pese a que acusó recibo como consta a folio 68 de la encuadernación.
- f) A la **ASOCIACIÓN MUTUAL PROGRESO "MUTUOPROGRESO"** no se pudo notificar pese a los esfuerzos del Despacho, ya que la empresa de correo 472 no reportó entrega de la correspondencia enviada a dicha vinculada.

## II. CONSIDERACIONES:

1.- Este Despacho es competente para conocer de esta acción de tutela, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991, Decreto 1382 de 2.000, y demás disposiciones aplicables, en consecuencia debe decidirse en primera instancia.

Se sabe que en los términos del artículo 86 de la Constitución Política, desarrollado por el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es el procedimiento pertinente para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en los eventos taxativamente regulados por la norma.



2.- Acorde con la jurisprudencia constitucional en torno a la procedibilidad de la tutela contra particulares, y conforme el artículo 86 de la Constitución Nacional y el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, se han señalado los casos en que procede el amparo, a saber : (i) cuando el particular contra el que se dirige tenga a su cargo la prestación de un *servicio público* o desempeñe *funciones públicas*; (ii) cuando la conducta del particular contra el que se dirige la tutela afecte grave y directamente el interés colectivo; (iii) cuando el solicitante se halle en estado de *subordinación* o de *indefensión* frente al particular contra el cual se interpone la tutela" <sup>1</sup>

En este caso, la accionante está legitimada para formular este amparo de tutela contra los particulares accionados ya que prestan un servicio público, por cuanto que desempeñan actividades financieras y aseguradora, correspondiendo a un vínculo comercial y contractual con ellos adquiridos, siendo estas las responsables de resolver la súplica, por lo que procede excepcionalmente este amparo de tutela contra un particular.

3.- Sobre la procedencia de la acción de tutela contra compañías de seguros puntualizó la Corte Constitucional:

*"Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que, en principio, el juez de tutela no es competente para analizar asuntos de materia contractual cuya pretensión sea puramente económica, como es el caso de las controversias relacionadas con el pago de seguros por ocurrencia del siniestro, toda vez que éstos deben ser estudiados y resueltos por la jurisdicción ordinaria. No obstante, la Corporación ha aceptado la procedencia de la acción de tutela de forma excepcional, especialmente en aquellos casos en que se pueda configurar una afectación a derechos fundamentales por razón de la falta de reconocimiento de la prestación económica.*

*En particular, la Corte ha analizado los casos en que los ciudadanos han adquirido un crédito de vivienda, garantizado, a su vez, por un seguro que se niega a pagar la aseguradora. Pese a que una primera aproximación permitiría concluir la improcedencia de la acción por razón de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, la Corte ha cuestionado la eficacia de ese tipo de acciones ordinarias para proveer una protección oportuna de los derechos de los accionantes. Por ello, ha señalado que la amenaza de derechos fundamentales tales como la vivienda digna y el mínimo vital es un argumento suficiente para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo. Al respecto, indicó:*

*"Cabe anotar que las accionantes podrían acudir a la jurisdicción ordinaria para exponer ante ella sus diferencias con las aseguradoras; sin embargo, esa vía judicial no se ofrece como una protección oportuna y efectiva para sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta que está en riesgo cierto su derecho al mínimo vital, por lo que se requiere, de ser factible conforme a los términos del contrato de seguro, adoptar medidas urgentes para evitar un perjuicio irremediable. Bajo estos supuestos la acción de tutela se torna procedente incluso como mecanismo definitivo de protección constitucional."*

*Finalmente, es pertinente resaltar que el requisito de subsidiariedad debe ser analizado de acuerdo con las particularidades de cada caso, especialmente cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional, por ejemplo, en los casos en que se encuentra en estado de indefensión. En efecto, la Corte ha indicado que el juez de tutela puede declarar la procedencia de la acción constitucional, incluso si no se han ejercido los mecanismos judiciales ordinarios, cuando el accionante, por su especial condición de debilidad con motivo de una grave enfermedad o situación de discapacidad, por ejemplo, no se encuentra en condiciones de adelantar este tipo de procesos y de atender a su resolución" <sup>2</sup>*

<sup>1</sup> (Sentencia T-798/07 M.P. Dr Jaime Córdoba Triviño

<sup>2</sup> Corte Constitucional Sentencia T-282 de 2016 M.P. Dra Gloria Stella Ortiz Delgado



En otro fallo consideró la Corte Constitucional sobre el punto:

*"Ante esta realidad, la jurisprudencia reiterada de la Corte ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela para pronunciarse sobre controversias surgidas con ocasión del contrato de seguro, cuando, por ejemplo, (i) se verifica una grave afectación de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional, como ocurre en el caso de las personas con una considerable pérdida de su capacidad laboral y que, además, no tienen ningún tipo de ingreso; o (ii) también en aquellos casos en que por el incumplimiento de las obligaciones contractuales que le asisten a la aseguradora, a pesar de la clara e inequívoca demostración del derecho reclamado, se ha iniciado un proceso ejecutivo en contra del reclamante."*<sup>3</sup>

4.- En el caso *sub examine*, se observa que la accionante, acude a este mecanismo reclamando la protección de los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, vida digna, vida e interés superior del niño, solicitando en sede de tutela que el BANCO BBVA y BBVA SEGUROS atiendan la reclamación del seguro de desempleo de que es beneficiaria desde el momento en que adquirió los créditos, señalando que se encuentra sin empleo desde el 15 de febrero de 2017, siendo informada por la Compañía de Seguros que no es posible acceder al pago del seguro por falta de cobertura alguna de desempleo.

→ No  
creto

5.- Corresponde al juez constitucional abordar el estudio referente al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la tutela, como son, la inmediatez y el de subsidiariedad, ya que el incumplimiento de dichos requisitos motiva la declaratoria de improcedencia.

Frente a los requisitos de procedibilidad de la tutela consideró la Corte Constitucional, como condiciones generales:

*"La jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado igualmente que los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela requieren como condiciones generales<sup>4</sup>: (i) que el problema en cuestión tenga relevancia constitucional (ii) que los medios ordinarios o extraordinarios de defensa judicial hayan sido utilizados por el tutelante; de esto se exceptúan aquellos casos en que se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la acción de tutela se presente en un término razonable contado a partir del momento en que se originó la trasgresión; (iv) que si se trata de una irregularidad procesal, se acredite que tiene un efecto decisivo en la providencia que se ataca, en forma tal que se vulneran derechos fundamentales de quien invoca el amparo; (v) que la parte actora identifique los hechos que generaron la vulneración y los derechos que estima quebrantados, asunto que debe haber sido alegado dentro del respectivo proceso, de ser posible; (vi) que no se refiera a fallos de tutela."*<sup>5</sup>

En torno a la inmediatez, se pronunció la Corte Constitucional y expuso:

*"En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que si bien la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad dentro del cual deba ser ejercida, la misma no puede solicitarse en cualquier momento sin atender la época en la que ocurrió la acción u omisión que origina la violación o amenaza de los derechos fundamentales de que se trate. Por tanto se ha exigido que la acción se promueva oportunamente, esto es, en un término razonable, después de la ocurrencia de los hechos que motivaron el agravio de los derechos, porque de otra forma se desvirtuaría el propósito mismo de la acción de tutela, cual es, como ya se indicó, proporcionar protección urgente o inmediata a los derechos fundamentales cuando quiera que se amenacen o vulneren, "de manera que, cuando ello ya no sea posible por inactividad injustificada del interesado, se cierra la vía excepcional del amparo constitucional y es preciso acudir a las instancias ordinarias para dirimir un asunto que, debido a esa inactividad, se ve desprovisto de la urgencia implícita en el trámite breve y sumario de la tutela..."*<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Corte Constitucional Sentencia T-501 de 2016 M.P. Dr Luis Guillermo Guerrero Pérez

<sup>4</sup> Corte Constitucional Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-580 de 2008 M.P. Humberto Sierra Porto.

<sup>5</sup> Corte Constitucional Sentencia T-1266/08 M.P. Dr Mauricio González Cuervo

<sup>6</sup> Corte Constitucional Sentencia T-584/11 M.P. Dr Jorge Ignacio Pretelt Chaljub



Según el desarrollo jurisprudencial frente a este requisito de procedibilidad corresponde al juez de tutela en cada caso particular estudiar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre la situación que origina la afectación de su derecho fundamental y la presentación del amparo de tutela, a fin de establecer si aquel resulta razonable, como también si se predica una justa causa por la cual en su oportunidad no se ejerció la acción constitucional.

En punto a la INMEDIATEZ, no se advierte cumplido por el Despacho, atendiendo que no es razonable el término transcurrido entre el hecho que motivó el agravio (separación del cargo /15 de febrero de 2017), y el reclamo constitucional (9 de agosto de 2017), lo que desvirtúa la importancia de este principio de procedibilidad, pues la tutela busca la protección **urgente e inmediata**, lo que permite inferir la inactividad del actor frente a la situación que ahora ventila en sede de tutela, tornando **improcedente** este amparo constitucional, además no demostró ni invocó justificación para la tardanza en acudir a este mecanismo constitucional.

En torno a la SUBSIDIARIEDAD, ha reconocido la Corte Constitucional que, la acción de tutela sólo procede en ausencia de otros recursos o medios de defensa judicial para lograr lo pretendido en el amparo.

6.- La accionante pretende por vía de tutela obtener el pago del seguro de desempleo que viene reclamando desde marzo de 2017, cuando la compañía de seguro le comunicó que objetó la reclamación del amparo por falta de cobertura, ya que la póliza de seguro que adquirió al momento del desembolso de los crédito con la entidad bancaria no cubre el amparo de "desempleo, constituyendo una controversia de índole netamente económico que no puede dirimirse a través de este ampro constitucional ya que escapa del alcance de esta acción, al no existir vulneración alguna de derechos de los derechos fundamentales de la accionante por el hecho de negarse el pago de dicha prestación económica, no demostrándose que haya ejercido los mecanismos judiciales ordinarios para lograr lo aquí pretendido.

Véase entonces, que este amparo de tutela se torna improcedente, por cuanto que la accionante ANA GRACIELA TORRES MORENO no acreditó ser un sujeto de especial protección constitucional, ni encontrarse o en condición de debilidad manifiesta o en estado de indefensión ante la Aseguradora, como tampoco acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable para que proceda este amparo de forma subsidiaria y excepcional como mecanismo transitorio, además que cuenta con otros recursos o medios de defensa judicial o de protección al consumidor financiero, referido a la discusión inherente al contrato de seguro, para dirimir si tiene derecho al pago de aquel ante la justicia ordinaria, ya que se trata de un conflicto contractual que debe resolver el juez competente sin que la promotora del amparo haya agotado los mecanismos ordinarios por las diferencias surgidas con la aseguradora, máxime que no existe cobertura del amparo pretendido, aunado al hecho que no advierte afectación de garantías constitucionales, ya que no se cumplen las premisas para ordenar el pago del seguro por vía de tutela



De este modo, resulta improcedente este amparo de tutela para obtener lo solicitado vía constitucional, pues el accionante cuenta con otros mecanismos judiciales, atendiendo que la acción de tutela sólo prospera en ausencia de otros recursos o medios de defensa judicial, atendiendo el carácter subsidiario y residual de la misma, de ahí que no se advierte cumplido el principio de subsidiariedad, por lo que no se amerita la intervención del Juez de tutela.

7.- En este orden de ideas, este amparo de tutela no está llamado a prosperar por no cumplirse el requisito de la subsidiariedad, lo que la torna improcedente.

### **DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Oralidad de Bogotá D.C., administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: NEGAR** el amparo de tutela instaurado por ANA GRACIELA TORRES MORENO, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

**SEGUNDO: NOTIFICAR** la presente decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

**TERCERO: REMITIR** la presente actuación con destino a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

**NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,**

  
**LUISA FERNANDA HERRERA CAYCEDO**

Juez